



## Derechos económicos, sociales y culturales

7

### Balance de las recomendaciones anteriores

En el EPU de 2018, China, Francia y Singapur recomendaron erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida de la población. Ambas recomendaciones se encuentran incumplidas; más de la mitad de la población está en situación de pobreza. Por su parte, Guyana recomendó intensificar esfuerzos para hacer frente a la inseguridad alimentaria, en particular en el Caribe y Pacífico. Según el PMA (1) (2022), la inseguridad alimentaria moderada y severa es de 30 % (15.5 millones).

En materia de educación, se incumplieron las recomendaciones de China, Rusia, Palestina, Haití, Santa Sede y Sri Lanka sobre garantía universal del derecho a la educación, disminución del analfabetismo en pueblos étnicos y superación de las brechas entre la ciudad y el campo. El ingreso a educación básica primaria no supera el 60 % y durante la pandemia las medidas no fueron suficientes para garantizar el acceso, la calidad, adaptabilidad y permanencia del sistema educativo, en zonas rurales, el escaso acceso tecnológico profundizó la exclusión. De acuerdo con Ministerio de Educación (2020), 8,3 % de integrantes de grupos étnicos, no cuentan con ningún nivel educativo y un 27,7 % alcanzó la educación primaria. En materia de salud, Honduras, recomendó mejorar el acceso a la salud en zonas rurales, mientras que Ghana y Palestina recomendaron garantizar los servicios de salud a adolescentes. Portugal y Zambia recomendaron ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC (2), recomendación que se mantiene incumplida.

### Desafíos

Entre 2018 y 2022 se agudizaron la pobreza y desigualdad, en especial, de mujeres y jóvenes. La pobreza monetaria alcanzó el 39,3 % y la pobreza extrema un 12,2 %. El 55,3 % de los hogares con mujeres cabeza de hogar están en situación de pobreza (2021). La situación de hambre se agravó con la pandemia. De acuerdo a la Encuesta Pulso Social del DANE (3) (2023), de 8.5 millones de hogares, solo 6,15 millones completan las tres comidas diarias (72,4 % de las familias) y hay 92.857 familias que viven con solo una comida (1,1%) e incluso 1.820 hogares no tienen como suplir un plato al día. La Defensoría del Pueblo señaló que en 2023 han muerto 53 niños y niñas menores de cinco años por causas asociadas a desnutrición, 18 de estos casos corresponden al departamento de La Guajira, en donde la mayoría de muertes son de niños y niñas wayúu; además siete de cada diez niños y las niñas migrantes venezolanos menores de cinco años hacen parte de hogares con inseguridad alimentaria (4). No se cumplió con el mandato del Acuerdo Final de Paz de poner en marcha un Sistema progresivo para la realización del derecho a la alimentación.

Persisten los altos niveles de deserción escolar, la baja tasa de cobertura y la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Según datos del Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 se gradúa como bachiller y de esos 44 graduados solo 17 (el 38,7 %) acceden a la educación superior. En la educación primaria se evidencia que la ausencia de cupos en las instituciones educativas y el cambio de vivienda son determinantes en la falta de cobertura, situación que se agudiza en niños y niñas migrantes venezolanos, quienes en 2022 fueron 583.550, de los cuales fueron retirados el mismo año 37.323. Hasta 2021 más de la mitad (el 53,4 %) de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años no se encontraba estudiando. Datos del Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo a corte de junio de 2022 muestra que el déficit en la educación media es más alto en zonas rurales que equivale al 45 % de la población. En 2022 del total de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el 41 % advirtieron riesgos a personal docente.

(1) Programa Mundial de Alimentos PMA, 2022

(2) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC

(3) Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

(4) WFP 2023. Evaluación de Seguridad Alimentaria: Migrantes y Comunidades de Acogida

Entre 2018 y 2022 personas trabajadoras y sindicalistas se vieron gravemente afectadas. Si bien hoy la tasa de desempleo es de 11,2 %, en 2019 se registró una tasa del 24,5 %, y los más afectados durante estos cinco años han sido las mujeres y los jóvenes. Las actividades que mayor relación tuvieron con la pauperización de las condiciones laborales fueron el sector servicios y comercio, con un 70 % y 40 % respectivamente con respecto al PIB. Entre 2018 y 2021 se registraron 495 casos de violencia contra sindicalistas.

Afectaciones a la salud y la vida durante la pandemia COVID-19. Se reportaron 139.867 fallecimientos por coronavirus; la mortalidad se concentró en los estratos 1 y 2 (61,5 %). 60.000 trabajadores y trabajadoras del sector salud se contagiaron y 300 fallecieron. El déficit de infraestructura en salud en Colombia para 2019 era de 1.3 prestadores por cada 1000 habitantes en departamentos con alto nivel de desarrollo y de 0.5 prestadores por 1000 habitantes en departamentos con bajo o temprano nivel de desarrollo.

## Recomendaciones

1. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PF-PIDESC y avanzar en la ratificación de los 44 Convenios de la OIT pendientes de ratificación (5).
2. Garantizar el acceso universal a la educación básica primaria de niños y niñas y adoptar un plan de disminución de los niveles de deserción. Tomar acciones para cerrar la brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas, incluyendo la implementación del Plan Especial de Educación rural, incluido en Acuerdo Final de Paz.
3. Diseñar participativamente una política pública alimentaria y ajustar el marco institucional, de gestión administrativa para garantizar el acceso progresivo del derecho a la alimentación. Avanzar en la implementación eficaz de todas las medidas contra el hambre incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Implementar medidas diferenciales y de emergencia en territorios con mayores niveles de inseguridad alimentaria.
4. Avanzar en la formulación, aprobación e implementación de una reforma laboral que garantice los derechos laborales, de asociación y sindicales. Tomar medidas inmediatas frente al desempleo y precarización laboral de jóvenes y mujeres.
5. Proteger y fortalecer el sistema público nacional de salud en Colombia bajo el enfoque de medicina predictiva y preventiva, la implementación de un plan de mejoramiento en infraestructura hospitalaria para las zonas apartadas y una política de talento humano en salud que garantice derechos laborales.